

Buenos Aires, 23 de junio de 2009

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la defensa de Hugo Fernando Romero en la causa Salgado, Héctor y otros s/ defraudación a la administración pública - causa n° 15.714 - 34.341", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. Vuelvan los autos al tribunal de origen con el fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Hágase saber y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

ES COPIA

VO-//-

-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Autos y Vistos:

En la decisión que se recurre, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal tuvo a su estudio dos cuestiones que la parte le había planteado: una, de derecho común, referida a la prescripción de la acción, y la otra, de carácter constitucional, vinculada con la garantía de la duración razonable del proceso. No obstante ello, el tribunal a quo sólo se expidió respecto de la primera, que versa sobre una materia que resulta ajena a la competencia extraordinaria de esta Corte (artículo 15 de la ley 48).

Con relación al agravio del plazo razonable, la Cámara sólo indicó que la interpretación de la garantía que proponía la defensa resultaba forzada, pues desvirtuaba el alcance de las normas en juego, en contraposición con la intención del legislador al dictar la nueva ley de prescripción (n° 25.990). Estos argumentos en modo alguno pueden ser considerados como un adecuado tratamiento del tema constitucional planteado, pues no puede admitirse que la procedencia de una cuestión federal (plazo razonable del proceso) sea decidida en base a fundamentos de derecho común (prescripción).

En el recurso de apelación, al fundar su reclamo por la afectación del plazo razonable, la defensa había señalado que el proceso llevaba más de diecisiete años de duración y que tal demora resultaba injustificada y totalmente atribuible a los organismos del Estado. A su vez, explicó por qué este caso resultaba similar al tratado por la Corte al dictar sentencia en la causa "Barra" (Fallos: 327:327). Este planteo ha sido reiterado en el recurso extraordinario y su respectiva queja.

Por su parte, el juez de instrucción había fallado

oportunamente en contra de dicha pretensión, señalando que el tiempo que había insumido la investigación encontraba razonable explicación en la complejidad de la maniobra de defraudación al Estado que se investiga en esta causa, que requirió —entre otras medidas— inspecciones oculares y recolección de prueba en diversos lugares del país, el análisis de 300 legajos de la Dirección General Impositiva y la evaluación de profusa documentación en más de sesenta empresas; a ello, agregó el magistrado que las defensas de los imputados habían realizado una gran cantidad de planteos, entre los que se cuentan numerosas excepciones previas.

Como puede apreciarse, la Cámara, pese a que tenía ante sí una controversia relacionada directamente con un tema constitucional, no se ha expedido sobre los aspectos del recurso vinculados con dicho asunto, circunstancia que, tal como ya lo he señalado en la causa "Vea Murguía de Achard" (Fallos: 329:3956), constituye un obstáculo para que esta Corte Suprema pueda ejercer correctamente su competencia apelada.

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja y se reenvía la causa al tribunal a quo para que dé tratamiento al punto federal en cuestión. Notifíquese y remítase. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Recurso de hecho interpuesto por **Hugo Fernando Romero**, representado por los **Dres. Marcelo Gustavo Morillas y Carlos Roberto Scotto**.

Tribunal de origen: **Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal**.

Tribunal que intervino con anterioridad: **Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 2 de Capital Federal**.